

cópias de la sentencia; y archívese á su vez el Toca.

México, Junio veintidos de mil ochocientos setenta y uno.—*Altamirano.*

Ejecutoria de la 1ª Sala de la Corte Suprema de Justicia.

México, Julio cuatro de mil ochocientos setenta y uno.

Vista la competencia promovida por el Juzgado de Distrito de Veracruz al Tribunal Superior del mismo Estado sobre conocer del interdicto de posesion promovido ante el Juez de primera instancia de Minatitlan, por D. Ricardo H. Lectech contra el C. Santiago Hernandez para que se le conservara en la de unos terrenos ubicados en la Isla de Capoeacan, conocidos con el nombre de Montoría de Chichigapa, en la que se hallan los terrenos nombrados Moeztuma: lo alegado por las partes en apoyo de la jurisdiccion respectiva: el informe rendido por el Juzgado de Distrito: lo pedido ante esta Sala por el C. Fiscal y todo lo demás que convino. Considerando: que el punto que se ha ventilado ante el Juez de Minatitlan, no afecta hasta ahora los derechos de la hacienda federal: y que la conducta observada por dicho Juez merece esclarecerse para que se proceda á lo que haya lugar en derecho, de conformidad con lo pedido por el C. Fiscal, se declara.

Primero: Que los Tribunales ordinarios del Estado de Veracruz han tenido jurisdiccion para conocer del interdicto promovido por D. Ricardo H. Lectech contra el C. Santiago Hernandez.

Segundo: Que se llame la atencion del Tribunal de Justicia de Veracruz, sobre la conducta que en este negocio ha observado el Juez de primera instancia de Minatitlan, para que proceda respecto de él á lo que haya lugar en derecho.

Tercero: Que se devuelvan las actuacio-

nes al Tribunal Superior referido con copia certificada de esta sentencia; remitiéndose copia igual al Juzgado de Distrito para los efectos consiguientes. Hágase saber y archívese á su vez el Toca.

Así lo mandaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron la primera Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—(Firmados.)—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Anza.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son cópias. México, Julio siete de mil ochocientos setenta y uno.—*Alejo Gomez Eguiarte*, oficial 2º y archivero.

COMPETENCIA

Promovida por el Juez de 1ª instancia de Jalapa, al de Distrito de Veracruz para conocer de la demanda interpuesta por D. Pedro Luelmo contra D. José María Rodríguez, sobre adjudicacion de terrenos municipales.

SENTIMIENTO DEL C. FISCAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.

El Fiscal dice: que se tienen á la vista los autos de competencia suscitada entre el Juez de Distrito de Veracruz y el de 1ª instancia de Jalapa, para conocer de la demanda que D. Pedro Luelmo sigue contra D. José María Rodríguez, sobre nulidad de adjudicacion de unos terrenos que la municipalidad de Tlaxolula le cedió con arreglo á las leyes de desamortizacion.

La razon en que se funda el Juez de Distrito para apoyar su jurisdiccion, es que en el presente caso, se trata de aplicar una ley federal y por lo mismo, está comprendido en la fraccion 1ª del art. 97 de la Constitucion general; á su vez, el Juez de Jalapa alega que se trata aquí de

preferencia de derechos entre dos particulares, y por lo mismo, y de conformidad con lo determinado en esta Corte Suprema, segun las diversas ejecutorias que en el informe de este Juez se citan, esas cuestiones toca resolverlas á los Tribunales del fuero comun.

El Fiscal entiende, que el caso necesita examinarse con alguna detencion.

El Fiscal desde luego reconoce y es un hecho incuestionable, que tratándose de preferencia de derechos entre dos ó mas individuos respecto de una cosa que se desamortizó, los Tribunales ordinarios son los que deben fallar esa controversia; pero cuando se objeta la nulidad de esa adjudicacion, parece que otra debe ser la resolucion. No es pues, lo mismo, un caso que otro. En el primero, la ley federal de desamortizacion ha surtido ya todos sus efectos; quedó cumplimentada en todas sus partes; la cosa desamortizada dejó de serlo; ya solo se disputa si debo recaer en el dominio de Pedro, Juan ó Diego; y por lo mismo, es muy justo que los Tribunales locales sean los que conozcan en este asunto; pero cuando precisamente se dice que esa ley no ha surtido todavía efecto ninguno, porque lo que es nulo, es como si no existiera; cuando se alega que la cosa no ha sido aun desamortizada, porque si ha habido nulidad en la adjudicacion, la cosa ha quedado en poder de la Nacion, como lo estaba antes de la operacion: entonces, no hay duda que los Tribunales de la federacion son los competentes como lo están siendo en la actualidad, para conocer de las denuncias de capitales afectos á manos muertas ó bienes de corporaciones.

Pues bien, este es precisamente el caso en que ahora nos hallamos. Entre Luelmo y Rodriguez no se trata de saber cual de ellos sea el que tenga mejor derecho en los terrenos adjudicados por la comunidad de Tlacolula, sino de esclarecer si esa misma comunidad pudo dar en arrendamiento esos terrenos, y despues proceder á su

adjudicacion, ya guardando los términos y condiciones de la primera escritura de arrendamiento á favor de Luelmo, ya de conformidad con lo pactado en la segunda á favor de Rodriguez. Es decir, se trata de saber si la comunidad de Tlacolula, cumplió ó no con una ley federal, si obró en los términos que previenen las leyes de reforma, y especialmente la de 25 de Junio de 1856 y su reglamentaria. Luelmo dice que no; que se ha faltado á ella en varias de sus disposiciones, se contrae particularmente á la violacion de los art. 1º, 5º y 10º de esa ley, lo que equivale á tanto como anular la operacion en su origen. El no pretende que los terrenos en cuestion lo portenczean; él solo defiende el derecho que concede á cualquiera persona el art. 10º, para licitar en pública subasta, una finca de comunidad. En una palabra, Luelmo toca cuestiones que afectan directamente á la ley misma, y por lo tanto solo los Tribunales de la federacion pueden resolverla. Hay mas, si como Luelmo indica en la adjudicacion hecha á Rodriguez, hubo fraude si esos terrenos fueron dados en arrendamiento, cuando ya la comunidad de Tlacolula no tenia capacidad legal para hacerlo; entonces es indispensable que la Hacienda pública tiene en ello un interés muy directo, y á sus Tribunales corresponde indudablemente, conocer de tales hechos.

Por lo expuesto, y con fundamento del art. 97, fracción 1ª de la Constitucion general, el Fiscal concluye con las siguientes proposiciones:

Primera: se declara que el Juzgado de Distrito de Veracruz, es el competente para conocer de la demanda que D. Pedro Luelmo sigue contra D. José María Rodriguez, sobre nulidad de la adjudicacion que al segundo le hizo la comunidad del pueblo de Tlacolula.

Segunda: Devuélvanse las actuaciones al referido Juez, con copia de esta sentencia para los efectos á que dá lugar; remí-

tase copia igual al de Jalapa para su conocimiento y archívese á su vez el Toca.

México, Junio veintitres de mil ochocientos setenta y uno.—*Allamirano.*

Ejecutoria de la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia.

México, Julio ocho de mil ochocientos setenta y uno.

Vista la competencia promovida por el Juez de primera instancia de Jalapa al de Distrito de Veracruz para conocer de la demanda puesta por el C. Pedro Luelmo contra el C. José M.^a Rodríguez, sobre nulidad de la adjudicación hecha á éste de unos terrenos de la municipalidad de Tlaxcolula; lo expuesto por las partes y por los Jueces contendientes en apoyo de la respectiva jurisdicción: los informes remitidos por los segundos á esta primera Sala, con lo pedido ante ella por el C. Fiscal; y oído lo alegado ante la misma, por el C. Lic. Diego Alvarez de la Cuadra, en favor de la jurisdicción del Juez de Distrito de Veracruz, y por el C. Lic. Agustín Rodríguez, en favor de la del Juez de primera instancia de Jalapa:

Considerando: que en el presente caso se ventila una cuestión entre particulares, relativa á preferencia de derechos, y que por lo mismo no interesa al erario público.

Que en caso de interesarlo, el interés sería del erario municipal del Estado de Veracruz y no de la federación; y que el artículo 107 de la ley de 5 de Febrero de 1861, que previene en su artículo 29, que todos los juicios que ocurran sobre puntos relativos á su ejecución, se sustancien y fallen definitivamente por los Jueces de primera instancia, cuya denominación se da á los Jueces del fuero común. Se declara: que el Juez de primera instancia de Jalapa es el competente para conocer de la de-

manda puesta por el C. Pedro Luelmo, contra el C. José M.^a Rodríguez, sobre nulidad de la adjudicación hecha á éste de unos terrenos que pertenecieron á la municipalidad de Tlaxcolula.

Remítanse las actuaciones al Juez de Jalapa con copia certificada de esta sentencia, remitiéndose copia igual al Juez de Distrito de Veracruz para los efectos consiguientes: hágase saber y archívese á su vez el Toca.

Así lo mandaron por unanimidad de votos los CC. presidente y ministros que formaron la primera Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Azaa.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Julio quince de mil ochocientos setenta y uno.—*Alejo Gomez Eguiarte*, oficial segundo y archivero.

CRIMINAL.

Causa seguida en el Juzgado de Distrito del Estado de México, contra Juliana Chavez, por circulacion de moneda falsa.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez 1.^o suplente:

El Promotor fiscal dice: que el hecho que aparece justificado en esta causa de haber aprehendido á Juliana Chavez, siendo portadora de unos medios falsos, segun el dicho de las personas que los reconocieron como peritos, no importa el delito de acuñación de moneda falsa. Mas la circulación de aquellas monedas que se dice pretendia hacer en el mercado de esta Ciudad al comprar medio de camotes á una persona que no se ha sabido quien sea, pudiera importar una especie de fraude que ameritara la im-